

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

En la Ciudad de Valencia, veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

VISTO por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana compuesta por:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Olarte Madero.

Magistrados Ilmos. Srs:

D. Edilberto Narbón Laínez.

D. Manuel Domingo Zaballos

AUTO

En el presente proceso núm. 140/2017, interpuesto por FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA (FCAPA), representada por el Procurador D. JOSÉ JOAQUÍN PASTOR ABAD contra Decreto nº 9/2017, de 27 de enero del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 7963, de 6 de febrero de 2017)”.

Habiendo sido parte en autos como Administración demandada CONSELLERÍA DE ADUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, representado y dirigido por la ABOGACÍA GENERAL DE LA GENERALIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. – Publicado el Decreto nº 9/2017, de 27 de enero del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 7963, de 6 de febrero de 2017), la parte demandante lo impugnó presentando el correspondiente recurso.

SEGUNDO. – Solicitada la suspensión de la aplicación del decreto como medida cautelar, constan cuatro autos de la Sala:

a) Con fecha 23 de mayo de 2017, la Sala dictó auto donde se acordaba la suspensión del Decreto sin necesidad de fianza. Interpuestos recursos de reposición la Sala dictó autos de 20 junio de 2017 desestimando recurso de reposición.

b) Promovido incidente de ejecución de los anteriores autos, con fecha 24 de julio de 2017, se dicta auto por la Sala donde pone de relieve que la forma en que ha llevado a cabo la ejecución del auto es contraria a derecho debiendo hacerlo conforme se ordenaba en el auto aplicando los Decretos 127/2012 y 234/1997.

c) Interpuesto recurso de reposición frente al auto de 24 de julio de 2017, se dictaron autos de 22.9.2017 el primero de ellos desestimando recurso de reposición.

d) La Consellería de Educación no cumplió la orden de suspensión; en su lugar, el Gobierno Valenciano apruebo el Decreto-Ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos de centro, convalidado por el Pleno de Les Corts en la sesión del 8 de septiembre de 2017 (DOCV de 12 de septiembre de 2017).

e) Con fecha 19 de diciembre de 2017, la Sala dicta providencia acordando oír a las partes sobre posible planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad sobre el Decreto Ley 3/2017, al entender que pretendía impedir la ejecución de los autos de suspensión.

f) Por Decreto del Gobierno Valenciano 219/2017, de 29 de diciembre, del Consell (DOGV 30 de diciembre de 2017), por el que se deroga el Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana.

CUARTO. - La Generalidad Valenciana, a la vista de la derogación del Decreto 9/2017, entiende que el proceso ha quedado sin objeto. Se dio traslado a las partes demandantes en los diferentes recursos que se han presentado contra el Decreto con resultado diferente: unos entienden que existe pérdida de objeto, aunque los efectos del Decreto derogado se mantienen, otros, entienden que ha existido satisfacción extraprocesal. Un tercer grupo no contesta y, finalmente, un cuarto grupo se opone porque estima que los efectos persisten y consideran necesaria la anulación.

QUINTO. -La petición de la generalidad es común en todos los procesos pendientes contra el Decreto 9/2017, en concreto ante esta Sala penden:

a) nº 140/2017, interpuesto por la Federación Católica de Asociación de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA).

b) nº 142/2017, interpuesto por la Diputación Provincial de Alicante.

c) nº 143/2017, interpuesto por D. Alberto Martínez Benia, D. José Manuel Carrillo González, D. Raúl Cantos López, D. José Ramón Pastor Pastor, Idiomas y Educación por el Derecho a elegir lenguas en Educación, Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros de Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma Valenciana (COVAPA) y Confederación de Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana.

d) nº 146/2017, interpuesto por Central Sindical Independiente y de funcionarios de la Comunidad Valencia (CSIF).

e) nº 150/2017, interpuesto por Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana (USO-CV).

f) nº 152/2017, interpuesto por ANPE-Sindicato Independiente.

g) nº 153/2017, interpuesto por VOX Partido Político.

h) nº 154/2017, interpuesto Dña. María del Carmen Mauricio Heredia, D. Miguel José Navarro Weiss y Dña. María Raquel Poveda Escribano.

i) nº 155/2017, Asociación para la defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana.

j) nº 156/2017, interpuesto por D. Rubén Ibáñez Bordonau, D. Luis Santamaría Ruiz y D. Juan de Dios Navarro Caballero.

El Tribunal ha decidido resolver de forma conjunta la solicitud de pérdida de objeto, no puede en un proceso sobre el mismo decreto afirmar a la vez que existe y no existe pérdida de objeto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – La pretensión de la Generalidad Valenciana es clara, se impugna el Decreto del Gobierno Valenciano nº 9/2017, habiendo sido derogado por el Decreto del Gobierno Valenciano 219/2017, no tiene sentido que el Tribunal se pronuncie sobre una norma que ha desaparecido del ordenamiento jurídico.

SEGUNDO. – El Tribunal estima que el análisis de la situación creada puede analizarse desde una doble perspectiva: formal, el recurso tenía por objeto la expulsión del ordenamiento jurídico del Decreto impugnado, su derogación por parte del Gobierno Valenciano supone el cumplimiento del objetivo que tenía la impugnación, el decreto ya no existe; material, el Decreto impugnado sigue manteniendo los mismos efectos que el día que se dictó, a pesar de existir cuatro autos de la Sala ordenando la suspensión cautelar con efecto inmediato, en concreto, desde el 23 de mayo de 2017. La Generalidad Valenciana siempre se ha escudado en que no eran firmes, el art. 79.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no puede ser más claro: *Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse recurso de súplica, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario*; por su parte, el Tribunal acordó la ejecución del auto conforme al art. 134.1 de la Ley “*el auto que acuerde la medida se comunicará al órgano administrativo correspondiente, el cual dispondrá su inmediato cumplimiento*”, máxime cuando la medida cautelar sigue vigente hasta que se dicte sentencia (art. 132.1) o sea modificada por el propio órgano que la dictó o el superior jerárquico (en nuestro caso el Tribunal Supremo) en virtud de recurso de casación. Para salvar el escollo que suponían la existencia de las tres primeras resoluciones incumplidas, se dictó el Decreto Ley Decreto ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos de centro. El Decreto Ley 3/2017, al asumir los proyectos lingüísticos de centro resultantes de la aplicación de la regulación del Decreto 9/2.017, mantiene en su mayor parte los efectos del Decreto derogado.

TERCERO. – La pérdida de objeto no viene prevista en la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro de la Sección 9ª del Capítulo I del Título IV “otros modos de terminación del procedimiento” sino en el art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable según la disposición final primera de la Ley 29/1998. El Tribunal Constitucional cuando se refiere a la pérdida de objeto de un recurso de inconstitucionalidad o cuestión de inconstitucionalidad planteada por algún Juzgado de Tribunal cuando la norma ha sido derogada afirma (SSTC 23/2013-fd 5, 213/2016) que no es posible dar una regla general aplicable a todos los supuestos, hemos de estar en cada caso a los efectos que pueda estar desplegando la norma derogada. El fundamento de derecho tercero del auto del Tribunal Constitucional nº

175/2017 nos dirá al respecto:

(...) Asimismo, en el fundamento jurídico 4 del ya citado ATC 23/2013, de 29 de enero, hemos admitido que una cuestión de inconstitucionalidad puede extinguirse por desaparición sobrevenida de su objeto como consecuencia de la derogación de la norma reglamentaria objeto de recurso directo en el proceso a quo si el reglamento no conserva ningún género de ultraactividad (como exige la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para declarar la extinción de esta clase de procesos) y la cuestión de inconstitucionalidad se formula contra la norma legal de cobertura (así, por ejemplo, STC147/2012, de 5 de julio). (...).

En conclusión, hemos destacado en el fundamento de derecho anterior que el Decreto derogado mantiene íntegra su vigencia, por tanto, sigue desplegando sus efectos –ultraactividad- y hace necesario un pronunciamiento de este Tribunal.

CUARTO. – En los antecedentes de hecho hemos expuesto que en los recursos contra el Decreto que penden ante esta Sala las posturas de las partes sobre la pérdida de objeto de diversas y divergentes, desde entender que existe pérdida de objeto hasta mostrar la disconformidad y continuación del proceso. Se impone dictar una resolución coincidente cada uno de los procesos en los que se impugna el Decreto 9/2017. Ello sin perjuicio de que las partes a la vista del conjunto de las actuaciones y de la presente resolución pueden solicitar el desistimiento vía art. 74 de la Ley 29/1998 o satisfacción extraprocesal vía art. 76 del mismo cuerpo legal.

QUINTO. – De conformidad con el art. 139 de la Ley 29/1998 no procede imponer las costas a ninguna de las partes sobre este incidente, dada las dudas de derecho suscitadas.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

LA SALA RESUELVE

DENEGAR la solicitud de pérdida de objeto del proceso solicitada por la GENERALIDAD VALENCIANA, prosigan las actuaciones. Sin costas.

El presente auto es firme no cabe recurso alguno, de conformidad con el art. 22.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 87 de la Ley 29/1998.

Así por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, certifico.